



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO

JUZGADO DIECIOCHO LABORAL
DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN

Medellín, veintinueve de julio de dos mil veintidós

PROCESO	Acción de tutela
ACCIONANTE	Sor Cardolina González Gil
ACCIONADO	Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES-y Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías PROTECCIÓN S.A.
RADICADO	05001 31 05 018 2022 000289 00
INSTANCIA	Primera
PROVIDENCIA	Sentencia 107 del 2022
DERECHO INVOCADO	Seguridad Social
DECISIÓN	Hecho superado

Conforme a lo dispuesto en el artículo 22 del Decreto 2591 de 1991, procede el Despacho a definir la viabilidad de la Acción de Tutela de la referencia.

ELEMENTOS FÁCTICOS

Manifiesta la accionante que cuanta con 63 de años de edad, afiliada al Régimen de Prima Media administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, en adelante COLPENSIONES. Sin embargo, estuvo afiliada anteriormente al Régimen de Ahorro Individual a través de PROTECCION S.A. Pensiones y Cesantías, en adelante PROTECCIÓN.

Mediante comunicado del 05 de mayo de 2022 PROTECCIÓN le informó que realizó el pago de las cotizaciones y demás sumas recibidas a su nombre trasladándolas a favor de COLPENSIONES mediante el archivo plano PRCPGAT202204121.E14. En atención a dicha comunicación radicó petición ante COLPENSIONES el 29 de junio de la presente anualidad solicitando lo siguiente:

“De manera muy respetosa, les solicito se me informe qué tramite se encuentra pendiente para la reactivación de mi afiliación al RPMPD administrado por Colpensiones y en que tiempo pueda estar normalizada mi historia, esto, pues ya tengo los requisitos para obtener mi pensión de vejez pero previo a la solicitud de reconocimiento de la prestación requiero que mi afiliación se encuentra activa y mi semanas cargas al sistema.”

COLPENSIONES emitió respuesta mediante oficio BZ2022_8803755-1938600 del 13 de julio de 2022. Sin embargo, la accionante considera que la misma no resuelve de fondo su solicitud. Discurre que, con dicha actuación, y al cumplir con los requisitos exigidos para

acceder a la pensión de vejez, se encuentra vulnerado su derecho fundamental a la seguridad social.

SOLICITUD DE TUTELA Y DERECHOS INVOCADOS

Solicita se proteja el derecho fundamental vulnerado y se le ordene a las accionadas que, de manera inmediata, realicen las gestiones tendientes a la actualización, corrección, traslado de aportes y emisión de la historia laboral.

RESPUESTA DEL ENTE ACCIONADO

A través de providencia del 18 de julio de 2022, se admitió la acción de tutela, ordenándose la notificación y concediéndole a las entidades accionadas el término de dos (2) días para que rindiera informe respecto de los hechos de la tutela.

Dentro de los términos conferidos para hacerlo, COLPENSIONES rindió informe indicando que existen 2 situaciones que impiden acceder a la solicitud de la accionante, la primera obedece a que se encuentra en curso el cumplimiento de sentencia ordinaria en la que está condicionada a que la AFP PROTECCIÓN adelante la gestión a su cargo y, la segunda es que la accionante no ha efectuado solicitud de cumplimiento de sentencia ordinaria y por ende no ha aportado los documentos necesarios.

Al no existir solicitud de cumplimiento de sentencia judicial, no es posible para la entidad endilgar una conducta omisiva por parte de la misma que sea susceptible de reproche constitucional. Aunado a lo anterior, se evidencia que la entidad emitió respuesta a la petición invocado en el escrito de tutela bajo oficio del 13 de julio de 2022, por medio del cual se le indicó, entre otros, “que para gestionar correctamente su solicitud es necesario que diligencie y radique en cualquier Punto de Atención Colpensiones — PAC” una serie de documentos entre los cuales se encuentra como obligatorio el documento de identidad y formulario de corrección de historia laboral datos básicos del afiliado.

Por otro lado, PROTECCIÓN SA rindió informe indicando que con miras a dar cumplimiento a Sentencia judicial, el 12 de abril de la presente anualidad traslado a COLPENSIONES los saldos de la cuenta individual de la accionante por la suma de \$129.049.112 y al ser la última administradora de fondos de pensiones en que estuvo afiliada la accionante se encuentra realizando las gestiones para reportar la historia laboral a través del Sistema de Información de Administradoras de Fondos de Pensiones -SIAFP-.

TRÁMITE DE LA TUTELA

Una vez adelantado el trámite correspondiente, se observa que resulta procedente proferir la decisión de fondo, toda vez que no se encuentra la existencia de irregularidad alguna que pueda invalidar lo actuado y este Despacho es competente para conocer de la acción de tutela impetrada, de conformidad con lo previsto en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia y el Decreto 2591 de 1991.

PROBLEMA JURÍDICO

El conflicto jurídico se centra en determinar si como lo asegura la accionante se ha vulnerado su derecho fundamental a la seguridad social al omitirse dar respuesta de fondo a la solicitud elevada y, por ende, realizar las actuaciones tendientes a la actualización, corrección, traslado de aportes y emisión de la historia laboral.

Encontrándose en este asunto que se acreditó en el trámite de tutela, que se resolvió la petición con el lleno de los requisitos para entenderse eficaz y de fondo. En consecuencia, resulta procedente concluir que se está ante la existencia de carencia actual de objeto por hecho superado, sin encontrarse vulneración a derecho fundamental alguno; tal como pasa a explicarse:

CONSIDERACIONES

El artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 1° del Decreto 2591 de 1991, señalan que procede la acción de tutela para reclamar la protección inmediata a derechos fundamentales ante la vulneración o amenaza de la acción u omisión de cualquier autoridad pública o particulares que cumplan función pública. Un aparte de la norma es el siguiente:

“Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces..., la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.
(...)

La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión.”

De acuerdo a la disposición antes citada, debe indicarse que la tutela es procedente ante cualquier entidad pública de cualquier nivel o de un particular en los casos señalados jurisprudencialmente, con el fin de solicitar la protección de los derechos fundamentales que se consideren amenazados o vulnerados por ellas.

Por su parte el derecho de petición, se encuentra contemplado en el artículo 23 de la Constitución Política, estableciendo lo siguiente:

“Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales”.

A través de la Ley Estatutaria 1755 de 2015, se reguló lo concerniente al derecho de petición ante las autoridades y los particulares, así como los términos para resolver las distintas modalidades de peticiones en el artículo 14 de la siguiente forma:

Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:

1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.

2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.

PARÁGRAFO. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto.

Ahora bien, frente al derecho de petición, la H. Corte Constitucional, ha establecido una línea jurisprudencial a través de la cual se indica que la Administración o un particular ante una petición presentada por cualquier persona, tiene la obligación de brindar una respuesta pronta y de fondo, ya que de no existir esta obligación se haría nugatorio el derecho a presentar peticiones, es decir, no tendría objeto contar con la posibilidad de presentar peticiones, si a su vez no se tuviera la seguridad de que se va a obtener una respuesta.

La obligación de la administración va más allá de dar una respuesta, pues esta debe tener las siguientes características para que se considere efectiva: 1) ser oportuna; 2) resolver de fondo, con claridad y precisión lo que se solicita y 3) debe ponerse en conocimiento del peticionario; de manera que, si no se cumple con alguno de ellos, se vulnera el derecho fundamental de petición.

Sobre estos elementos configuradores del derecho de petición, la H. Corte Constitucional se ha pronunciado entre otras, en sentencia T-140 de mayo de 2021, M.P. Cristina Pardo Schlesinger, en los siguientes términos:

“(i) La pronta resolución constituye una obligación de las autoridades y los particulares de responder las solicitudes presentadas por las personas en el menor plazo posible, sin que se exceda el tiempo legal establecido para el efecto, esto es, por regla general, 15 días hábiles.

(...)

(ii) La respuesta de fondo hace referencia al deber que tienen las autoridades y los particulares de responder materialmente a las peticiones realizadas. Según esta Corte, para que no se vulnere el derecho fundamental de petición, la respuesta debe observar las siguientes condiciones: a) claridad, esto es que la misma sea inteligible y que contenga argumentos de fácil comprensión; b) precisión, de manera que la respuesta atienda directamente a lo solicitado por el ciudadano y que se excluya toda información impertinente y que conlleve a respuestas evasivas o elusivas; c) congruencia, que hace referencia a que la respuesta esté conforme con lo solicitado; y por último, d) consecuencia en relación con el trámite dentro del cual la solicitud es presentada, de manera que, si la respuesta se produce con motivo de un derecho de petición elevado dentro de un procedimiento del que conoce la autoridad de la cual el interesado requiere la información, no basta con ofrecer una respuesta como si se tratara de una petición aislada o ex novo, sino que, si resulta relevante, debe darse cuenta del trámite que se ha surtido y de las razones por las cuales la petición resulta o no procedente.

(iii) La notificación de la decisión atiende a la necesidad de poner al ciudadano en conocimiento de la decisión proferida por las autoridades, ya que lo contrario, implicaría la desprotección del derecho de petición. La notificación en estos casos se traduce en la posibilidad de impugnar la respuesta correspondiente. Frente a este elemento del núcleo esencial de la petición, esta Corte ha explicado que es la administración o el particular quien tiene la carga probatoria de demostrar que notificó al solicitante su decisión, pues el conocimiento de ésta hace parte del intangible de ese derecho que no puede ser afectado”.

Igualmente, la Alta Corporación ha clarificado que la respuesta al derecho de petición resulta suficiente si se cumple con los requisitos anteriores, sin que se implique la aceptación de lo que se pide, pues la respuesta puede ser positiva o negativa; tampoco puede la administración exonerarse de la obligación de dar respuesta por falta de competencia de la entidad a la que se presentó la misma y cuenta con los términos establecidos en la Ley Estatutaria 1755 de 2015 ya indicados.

Todo lo anterior, ha sido explicado por la Alta Corporación, entre otras en Sentencia T- 077 de marzo de 2018, M.P Antonio José Lizarazo Ocampo, en los siguientes términos:

1) El de petición es un derecho fundamental y resulta determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa.

2) Mediante el derecho de petición se garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos de acceso a la información, la libertad de expresión y la participación política.

3) La respuesta debe satisfacer cuando menos tres requisitos básicos: (i) debe ser oportuna, es decir, debe ser dada dentro de los términos que establezca la ley; (ii) la respuesta debe resolver de fondo el asunto solicitado. Además de ello, debe ser clara, precisa y congruente con lo solicitado; y (iii) debe ser puesta en conocimiento del peticionario.

4) La respuesta no implica necesariamente la aceptación de lo solicitado, ni se concreta necesariamente en una respuesta escrita.

(...)

9) La presentación de una petición hace surgir en la entidad, la obligación de notificar la respuesta al interesado.

Debe tenerse en cuenta además que, a causa de la declaratoria del estado de emergencia, ordenada mediante Decreto 417 de 17 de marzo de 2020, el presidente de la República en uso de sus facultades expidió el Decreto Legislativo 491 de 28 de marzo de 2020, que establece en su artículo 5° la ampliación de los términos para atender las peticiones durante la vigencia de la emergencia sanitaria. Mediante Ley 2207 del 17 de mayo de 2022 se derogó a partir del día siguiente de su promulgación el artículo 5 y 6 del Decreto Legislativo 491 de 28 de marzo de 2020.

Respecto al hecho superado, ha de indicarse inicialmente que la H. Corte Constitucional, ha explicado a través de su jurisprudencia que en los casos en que hechos sobrevinientes a la acción de tutela varían significativamente el supuesto de hecho que originó la solicitud de tutela, desapareciendo la razón de la acción, la necesidad de protección actual e inmediata de los derechos que se aduce son conculcados, situación que se ha denominado como carencia actual de objeto y que se ha dicho que, se presenta como hecho superado o daño consumado. El hecho superado se presenta cuando los actos que amenazan o vulneran el derecho fundamental desaparecen, por haberse satisfecho la petición presentada con la acción de tutela, lo que implica que ya no haya riesgo y en ese sentido no tiene razón de ser la orden a impartir por parte del juez, ya que no existe perjuicio por evitar. En cuanto al daño consumado, debe indicarse que se presenta cuando la vulneración o amenaza se ha producido y ha generado el perjuicio que se pretendía evitar con la acción, por lo que lo procedente es el resarcimiento del mismo y no emitir la orden para hacer cesar la violación o impedir que se concrete el peligro.

La Alta Corporación ha sido reiterativa al afirmar que, carece de fundamento emitir una

orden en una Acción de Tutela, cuando se evidencia que ha cesado la conducta que amenaza o vulnera derechos fundamentales, así lo expuso en la Sentencia T-146 de 2012, con M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, en los siguientes términos:

“...2.2.4. Hecho superado por carencia actual de objeto, reiteración de jurisprudencia:

Esta Corporación ha considerado que cuando hay carencia de objeto, la protección a través de la tutela pierde sentido y, en consecuencia, el juez de tutela queda imposibilitado para emitir orden alguna de protección del derecho fundamental invocado.

En la Sentencia T-988/02, la Corte manifestó que “(...) si la situación de hecho que origina la violación o la amenaza ya ha sido superada en el sentido de que la pretensión erigida en defensa del derecho conculcado está siendo satisfecha, la acción de tutela pierde eficacia y por lo tanto razón de ser.”

En este orden de ideas, se ha entendido que la decisión del juez de tutela carece de objeto cuando, en el momento de proferirla, se encuentra que la situación expuesta en la demanda, que había dado lugar a que el supuesto afectado intentara la acción, ha cesado, desapareciendo así toda posibilidad de amenaza o daño a los derechos fundamentales.

De este modo, se entiende por hecho superado la situación que se presenta cuando, durante el trámite de la acción de tutela o de su revisión en esta Corte, sobreviene la ocurrencia de hechos que demuestran que la vulneración de los derechos fundamentales, en principio informada a través de la instauración de la acción de tutela, ha cesado...”

ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO

En esta acción de tutela se solicita la protección del derecho fundamental a la seguridad social, el cual considera la accionante vulnerado por las accionadas ante la falta de respuesta al derecho de petición elevado el 29 de junio de 2022 donde solicitó información sobre el trámite pendiente para la reactivación al RPMPD administrado por Colpensiones. Pretende se ordene a las accionadas que, de manera inmediata, realicen las gestiones tendientes a la actualización, corrección, traslado de aportes y emisión de la historia laboral.

Por su parte, dentro de los términos conferidos para hacerlo, COLPENSIONES rindió informe indicando que existen 2 situaciones que impiden acceder a la solicitud de la accionante, la primera obedece a que se encuentra en curso el cumplimiento de sentencia ordinaria en la que está condicionada a que la AFP PROTECCIÓN adelante la gestión a su cargo y, la segunda es que la accionante no ha efectuado solicitud de cumplimiento de sentencia ordinaria y por ende no ha aportado los documentos necesarios.

Por su parte, PROTECCIÓN SA rindió informe indicando que con miras a dar cumplimiento a Sentencia judicial, el 12 de abril de la presente anualidad traslado a COLPENSIONES los saldos de la cuenta individual de la accionante por la suma de \$129.049.112 y, al ser la

última administradora de fondos de pensiones en que estuvo afiliada la accionante se encuentra realizando las gestiones para reportar la historia laboral a través del Sistema de Información de Administradoras de Fondos de Pensiones -SIAFP-.

Debe recordarse que tal como se señaló en precedencia, el derecho de petición apareja la obligación de la administración o particular, de brindar una respuesta oportuna, de fondo, con claridad y precisión, que debe ser puesta en conocimiento del peticionario o peticionaria, sin que ello implique que sea positiva, es decir, accediendo a las pretensiones de la parte, ya que puede ser negativa y con ello se estaría dando respuesta en los términos indicados.

Revisada la documentación allegada al despacho y que obra en el expediente digital, se encontró copia del derecho de petición elevado a COLPENSIONES identificada bajo radicado 2022_8784933 del 29 de junio de 2022 (ítem 2 del expediente digital fls. 12 y ss), de donde se desprende solicitud de información sobre el trámite que se encuentra pendiente para la reactivación al régimen administrado por COLPENSIONES y un tiempo estimado para verse normalizada la historia laboral. Igualmente, se evidencia copia de la respuesta emitida por COLPENSIONES identificado bajo radicado BZ2022_8803755-1938600 del 13 de julio de 2022, de donde se desprende respuesta con el lleno de los requisitos para entenderse de fondo y congruente, toda vez que se le está indicando que para el trámite de corrección de historia laboral debe diligenciar de manera obligatoria el Formulario de Corrección de Historia Laboral datos básicos del afiliado y aportar la copia de la cedula de ciudadanía, los demás documentos que refiere en la contestación son de carácter opcional.

Observa esta judicatura que el derecho de petición elevado por la accionante no es claro y solicitó una información puntual que a todas luces es diferente a su pretensión final que obedece al cumplimiento de sentencia judicial, por ende, la entidad se limitó a contestar teniendo en cuenta lo planteado en el escrito petitorio. Del mismo modo, se evidencia que los hechos y las pretensiones expuestas en la presente acción constitucional no son congruentes entre ellas, toda vez que la accionante expone dentro de los supuestos facticos unos hechos que van encaminados a la resolución de un derecho de petición, sin embargo, es claro que su pretensión va encaminada al cumplimiento de sentencia judicial que dirimió un conflicto sobre nulidad de traslado.

Teniendo en cuenta lo anterior, si la pretensión de la accionante es el cumplimiento de sentencia judicial debe dirigir su derecho de petición de una manera clara y exponer de forma completa los hechos que dieron lugar a la petición. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que la accionante dirigió su derecho de petición a solicitar información sobre el trámite pendiente para la reactivación al RPMPD administrado por Colpensiones y actualización de historia laboral, la entidad contestó indicando la necesidad de iniciar dicha solicitud con la lista de documentos y formularios necesarios para dicho trámite. Aunado a

que la accionante no ha radicado la solicitud de cumplimiento de sentencia judicial ante dicha entidad.

Advierte esta judicatura que, en caso de pretender cumplimiento de la condena emitida a su favor, la accionante cuenta con un procedimiento legalmente establecido, esto es, el proceso ejecutivo a continuación del proceso ordinario, que le permite a la accionante solicitar la ejecución de la sentencia a la entidad condenada ante el mismo juez de conocimiento inicial.

En consonancia con lo anterior, evidencia esta dependencia judicial que el objeto generador de la vulneración cesó, puesto que la entidad accionada resolvió de fondo la solicitud elevada que dio lugar a la presente acción constitucional, poniéndoselo en conocimiento, por lo cual, se está frente al supuesto de carencia actual de objeto por hecho superado que torna inocua la orden judicial, como quiera que la situación que originó la presente acción constitucional ya desapareció y en consecuencia, tal como se explicó en precedencia, de esa forma se habrá de declararse.

Finalmente, se ordenará notificar la decisión en la forma establecida por el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991, indicándose a las partes que la misma puede ser impugnado dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación y que, en caso de no impugnarse la acción, una vez el fallo alcance ejecutoria formal, se enviará lo actuado ante la H. Corte Constitucional a efectos de su eventual revisión.

DECISIÓN

Por lo expuesto, el JUZGADO DIECIOCHO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, administrando justicia en nombre de la República y por mandato constitucional,

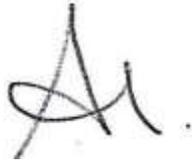
FALLA

PRIMERO. DECLARAR la existencia de CARENANCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO en la acción de tutela instaurada por la señora SOR CARDOLINA GONZÁLEZ GIL en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES- Y ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A sin que haya lugar a tutelar derecho fundamental alguno, por las razones indicadas en las consideraciones.

SEGUNDO. ORDENAR la notificación de este fallo en la forma establecida en el Artículo 30 del Decreto 2591 de 1991, advirtiéndole a las partes que el mismo puede ser impugnado dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación.

En caso de no impugnarse, una vez alcance ejecutoria formal, se enviará lo actuado ante la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



ALBA MERY JARAMILLO MEJIA
JUEZA

IRI